

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE : CLAUDIA CECILIA MURILLO LÓPEZ
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-017-2020-00268-01
RADICADO INTERNO : 032-21
DECISIÓN : REVOCA, DECLARA, ORDENA y CONDENA
ACTA NÚMERO : 087

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

De conformidad con la sustitución del poder que se allega al correo electrónico, por parte del Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA (representante legal de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS SAS), al Dr. DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, para que represente los intereses de Colpensiones, por cumplir los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se le reconoce personería.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia del trasladado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, por lo que resulta nula o ineficaz o inexistente la afiliación a PROTECCIÓN S.A.; que las cosas deben volver al estado en que se encontraban y en consecuencia PROTECCIÓN S.A. debe entregar o trasladar a Colpensiones el valor de los

aportes recibidos por la afiliación, cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses, cuotas de administración y cualquier otro concepto que esté en la cuenta de ahorro individual de la parte demandante; que es nulo o ineficaz o inexistente, cualquier reconocimiento prestacional que haya realizado o llegue a realizar la sociedad PROTECCIÓN S.A. tal como pensión de vejez, devolución de aportes, o cualquier otro derivado de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual. Se le ordene a Colpensiones a recibir a la demandante como afiliada del Régimen de Prima Media, declarando que no existió solución de continuidad en la afiliación; a cobrar o recibir los valores depositados en la cuenta de ahorro individual recibidos por la afiliación, cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses, cuotas de administración y cualquier otro concepto que esté en la cuenta de ahorro individual; realizar el computo de semanas cotizadas por toda la vida laboral. Se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar perjuicios materiales y morales causando a la demandante, estimados en 200 salarios mínimos o la suma que el juez considere. Y se impongan costas procesales a las demandadas.

Como supuestos facticos con los que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 9 de septiembre de 1963. Que realizó aportes a Colpensiones y el 1º de noviembre de 1996 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a través de DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A.. Que los asesores de los fondos no la asesoraron de manera técnica y adecuada a la hora de tomar la decisión de trasladarse de régimen; que la decisión de trasladarse no fue espontánea, voluntaria y libre porque al ocultarle información, la demandante tomó la decisión sin la debida información. Además del vicio subjetivo, el acto de traslado está viciado de nulidad o ineficacia objetiva por ir en contra del art. 53 de la Constitución Nacional, de contenido similar el art. 272 de la Ley 100 de 1993. Y la indebida asesoría por parte de los fondos privados ha causado perjuicios a la demandante.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 2 de febrero de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a la sociedad PROTECCIÓN S.A. de todas y cada una de las pretensiones invocadas en su contra. No se impuso costas en esa instancia. Decisión adoptada, al advertir la existencia de la reasesoría del 25 de agosto de 2010 con espacio de 15 días antes de cumplir los 47 años de edad, y en dicha asesoría le pusieron de presente unos cálculos que mostraban que su pensión hasta los 60 años iban a ser una garantía de

pensión mínima, se le indicó que tenía hasta el 8 de septiembre de 2010 para tomar una decisión y ella manifestó que la aplazaba, argumentos por los que consideró la A Quo que se convalidó su afiliación sin que se pudiera alegar su propia culpa.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpone recurso de apelación, argumentando que no ha y duda que los jueces se pueden separar de la jurisprudencia pero no acepta que el fundamento de apartarse de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral sean salvamentos o aclaraciones de voto porque sería aceptar que solo hay jurisprudencia cuando las decisiones son unánimes, sin embargo, la tesis mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia es jurisprudencia y allí se pactan unas reglas de los diferentes asuntos, entre ellas, el tema de la reasesoría. Resalta la sentencia de la Corte en el caso de un reasesorado beneficiario del régimen de transición, y donde la importancia no es la pérdida del régimen de transición sino porque la información se debe de mirar al momento del traslado y no en un momento posterior, porque la norma que tenemos en seguridad social habla de la eficacia del traslado, lo que hace que se mire al momento que se hace el traslado de régimen. Retoma apartes de la sentencia SL 1688 de 2019. Refuta las pruebas con la que el despacho falla y que con base en ellas no se concluye que la reasesoría se haya dado en los términos de la Corte Suprema de Justicia o del art 13 de la Ley 100 de 1993; resalta la sentencia SL 4426 de 2019; que, en virtud del orden cronológico de las dos asesorías, no se cumplió la carga de la prueba del deber de información ni el buen consejo en la asesoría inicial ni en la reasesoría. Y en segundo lugar solicita el reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda, por considerar que en estos procesos se deben presumir los perjuicios morales, causado por el estrés, la preocupación al que se ven sometidos, el desgaste de llevar este proceso, y ver en peligro la pensión, perjuicios que deben ser superiores a 120 salarios mínimos legales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte accionante solicita la revocatoria de la sentencia, porque en primera instancia se desconoce el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien pacíficamente ha sostenido que la reasesoría no sana la falta de información en la sentencia SL 1688 de 2019; así mismo se desconoce el precedente del Tribunal Superior de Medellín que, a través de sus diferentes Salas de Decisión, ha establecido

que la reasesoría no convalida el acto. Que la juez encontró probado que en el traslado inicial que se dio hacia PROTECCIÓN en el año 1996 faltó al deber de información, por lo que hay lugar a revocar la sentencia y declarar la ineficacia del acto, conforme lo establecido en el art. 271 de la Ley 100 de 1993. En gracia de discusión, si se acepta que la reasesoría convalida el error inicial, se debió demostrar que en dicha reasesoría, se ilustró con mayor suficiencia a la demandante, porque para el año 2010, las administradoras tenían la obligación del buen consejo. Y la reasesoría dada a la demandante fue defectuosa, incompleta e imprecisa.

Y el apoderado de Colpensiones solicita se confirme la sentencia absolutoria, conforme a lo dispuesto en la línea jurisprudencial de las sentencias SL 4360, SL 1452, SL 3843, SL 3749 y SL 361 de 2019, entre otras, en las cuales se rescata el deber de información y donde existe responsabilidad del afiliado en la escogencia del régimen pensional; en este evento, la accionante pese a recibir reasesoría por la accionada PROTECCIÓN S.A, no quiso retornar al Régimen de Prima Media y postergó la decisión de su traslado; que la accionada PROTECCIÓN S.A. cumplió su deber de información, al informarle a la demandante que le convenía más trasladarse, según lo establecido en las sentencias SL 4360 y SL 1452 de 2019. Y de conformidad con lo establecido en la circular 019 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud de afiliación o traslado se analiza de manera directa y voluntaria ejerciendo el derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en el literal b) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, y porque las personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual y retornen al ISS, no conservan el régimen de transición, por lo tanto, la demandante firmó voluntariamente después de haber sido asesorada.

Considera que se debe tener en cuenta la prohibición expresa del traslado de los afiliados cuando les falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, y en este caso la accionante estaba inmersa en esa limitante, al momento de elevar la solicitud del traslado por contar con 57 años de edad. Otro de los argumentos presentados, tiene que ver con el principio de sostenibilidad del sistema de la seguridad social, porque los recursos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual y del bono pensional, pueden ser insuficientes para cubrir cualquier eventual retroactivo pensional y la declaratoria de sin solución de continuidad al régimen de prima media, atentaría contra la sostenibilidad del sistema de seguridad social del Régimen de Prima Media.

En el evento de ser desfavorable la decisión, solicita se tenga en cuenta que Colpensiones está gobernada por el principio de legalidad, por tanto, cualquier acto administrativo que expida, debe estar acorde al ordenamiento jurídico que lo gobierna; que en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración, que no existe el Régimen de Prima Media, por lo que no pueden ser equivalentes los aportes transferidos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, y según las sentencias 31.989 de 2008, SL 17595 de 2017, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, tales como son los recursos cuenta individual de ahorro, las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los rendimientos, la anulación de bonos pensionales, los porcentajes destinado al pago de seguros previsionales y gastos de administración, los cuales se deben hacer en forma indexada.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar: i) Si el A Quo desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia; ii) Si en el presente evento hay lugar a declarar la ineficacia del traslado, teniendo en cuenta la información brindada al momento del traslado y no en un momento posterior, ni en la reasesoría; y iii) Si hay lugar al reconocimiento de los perjuicios a la demandante.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 40 años de edad al haber nacido el 9 de septiembre de 1963 (fl. 13); cotizó al ISS desde el 25 de enero de 1985 a octubre de 1996 (fl. 136 a 138 foliatura del expediente digital); y solicitó traslado a DAVIVIR S.A. el 1º de noviembre de 1996 (fl. 19 y 27); que PROTECCIÓN S.A. reasesoró a la demandante el 25 de agosto de 2010 (fl. 45).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que se trasladó a PROTECCIÓN S.A. en 1996 y un asesor de DAVIVIR llegó de un fondo al sitio donde trabajaba y le informó que tenía muchos beneficios para trasladarse; esa reunión duró 10 minutos aproximadamente; fue una reunión individual; el asesor no la obligó a suscribir el formulario de afiliación; el asesor le indicó que DAVIVIR era un fondo

privado, no le explicó los requisitos para tener derecho a la pensión, no le explicó qué iba a pasar con el tiempo cotizado al ISS, no le explicó que iba a tener una cuenta de ahorro individual, le dijo que le convenía pasarse para ese fondo porque en esa época el ISS estaba en quiebra y se estaban creando esos fondos de pensiones para ayudarle a la gente a tener una opción mejor, no le informó las características que tenía ese fondo. En el año 2010 la llamaron para hacerle otra asesoría, allí le hicieron un paralelo con el ISS; en esa asesoría le dijeron que PROTECCIÓN S.A. tenía mayor seguridad porque el ISS seguía en quiebra y tenía mayor rentabilidad con PROTECCIÓN S.A.; no recuerda haber escuchado que después de los 47 años no se podía trasladar al Régimen de Prima Media; ella no dijo que iba a aplazar la decisión de quedarse o trasladarse porque ella salió tranquila, ellos la convencieron, porque ella salió segura que eran los mejores; que no entiende que es pensión de garantía mínima, ella entiende que con los comentarios que se hicieron de PROTECCIÓN S.A. ella estaba tranquila hasta que escucho que uno se jubilaba con el mínimo. Reconoce la firma de fls. 303 pero no recuerda porque en la asesoría le hablaba mientras ella firmaba documentos; no recuerda que le hayan hablado de aportes voluntarios y no ha realizado aportes voluntarios. No fue coaccionada para firmar el formulario, ella firmó porque estaba convencida que PROTECCIÓN S.A. era la mejor opción.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la

Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994 permite al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene

que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indico que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues a diferencia de lo señalado en primera instancia, cuando advierte la existencia de una reasesoría del 25 de agosto de 2010 (fl 301 del expediente digital), con espacio de 15 días antes de cumplir los 47 años de edad, y en dicha asesoría le pusieron de presente unos cálculos que mostraban que su pensión hasta los 60 años iban a ser una garantía de pensión mínima, se le indicó que tenía hasta el 8 de septiembre de 2010 para tomar una decisión y ella manifestó que la aplazaba, argumentos por los que consideró la A Quo que se convalidó su afiliación sin que se pudiera alegar su propia culpa. Decisión que esta Sala no comparte, toda vez que el deber de información se genera **al momento de la antesala del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual**, debiendo la entidad accionada PROTECCIÓN S.A., traer al plenario prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, **cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones**. Y así lo reitera la Corte Suprema de Justicia recientemente en sentencia SL 4373 de 2020 cuando manifestó:

*“Por consiguiente, **antes de surtirse el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad**, la administradora privada de pensiones tenía el inexcusable deber de brindar a la afiliada información suficiente, clara, comprensible y oportuna sobre las características de los dos regímenes*

pensionales y las consecuencias reales de abandonar el régimen al que se encontraba vinculada, entre ellas, la pérdida del régimen de transición.” (Negrilla fuera del texto)

Así las cosas, le correspondía a la sociedad PROTECCIÓN S.A. acreditar que cumplió el deber de dar información suficiente y cierta, sin que lo haya hecho, al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad accionada aporte el formulario de afiliación a DAVIVIR, reasesoría brindada por PROTECCIÓN S.A. el 25 de agosto de 2010, simulación pensional, resumen de historia laboral, historial de vinculaciones, historia laboral, reporte de estado de cuenta, documento denominado “POLÍTICAS ASESORAR PARA VINCULAR PERSONAS NATURALES”; concepto de Superintendencia Financiera del 29 de diciembre 2015, comunicados de prensa (fls. 300 a 334), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al Régimen de Ahorro Individual, **no le dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a ello, la sentencia recurrida deberá ser REVOCADA y en su lugar se DECLARARÁ la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, realizado el 6 de marzo de 2000 a la sociedad Protección S.A.

Como consecuencia de lo anterior, se le **ORDENARÁ a la sociedad PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a Colpensiones:

I) Los dineros tenga en la cuenta de ahorro individual de la demandante, por concepto de cotizaciones y rendimientos.

II) Los gastos de administración debidamente indexados hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece las sentencias SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos lo ahorrado o se hubiere hecho pagos posteriores a la cotización, no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron y fueron administrados por la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

III) Las sumas adicionales de la aseguradora hay lugar a devolverlas debidamente indexada, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”*

IV) Y el porcentaje de garantía de pensión mínima, considera la Sala que **debe ser devuelto** a Colpensiones, teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a la sociedad PROTECCIÓN S.A..

Conforme a lo anterior, se le **ORDENA** a Colpensiones a recibir los dineros que traslade la sociedad PROTECCIÓN S.A., y realice la reactivación al Régimen de Prima Media a través de COLPENSIONES, reflejándose en las historias laborales los aportes recibidos de la demandante sin solución de continuidad.

2. De los perjuicios solicitados

Al respecto, la demandante tenía la carga de probar los daños materiales y morales padecidos, con ocasión a la toma de la decisión de haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual, perjuicios que no lograron ser acreditados en el plenario, toda vez que con el interrogatorio de parte no se logran avizorar, razón por lo que la Sala considera que no hay lugar a su reconocimiento.

3. Costas en primera instancia

A la luz del art. 365 del CGP, al salir adelante las pretensiones de la demanda, es que se CONDENARÁ en costas a la sociedad PROTECCIÓN S.A. por ser la AFP que tenía el deber de dar información clara, completa, amplia y suficiente, sin que lo haya realizado.

Sin costas en esta instancia por salir adelante el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar se **DECLARAR** la ineficacia del traslado de la señora CLAUDIA CECILIA MURILLO LÓPEZ del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad PROTECCIÓN S.A., a trasladar a Colpensiones los dineros tenga en la cuenta de ahorro individual de la demandante, por concepto de cotizaciones, rendimientos, así como trasladar las sumas adicionales de la aseguradora y los gastos de administración **ambos debidamente indexados**, y el porcentaje de garantía de pensión mínima.

TERCERO: Se le **ORDENA** a Colpensiones a recibir los dineros que traslade la sociedad PROTECCIÓN S.A., y realice la reactivación al Régimen de Prima Media a través de COLPENSIONES, reflejándose en las historias laborales los aportes recibidos de la demandante sin solución de continuidad.


CUARTO: CONDENAR en costas en primera instancia a la sociedad PROTECCIÓN S.A. Sin costas en esta instancia.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 062 del 15 de abril
de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>